

Globethics Repository



Costa Rica

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Rojas Bolaños, Manuel
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-04-20 21:57:40
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219452

Nueva Sociedad Nro. 149 Mayo-Junio 1997, pp. 16-19

Costa Rica. Fuegos electorales y estancamiento económico

Manuel Rojas Bolaños

Manuel Rojas Bolaños: sociólogo costarricense, profesor de la Maestría Centroamericana en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, San José.

Palabras clave: elecciones, PLN, PUSC, Costa Rica.

Unos meses antes de iniciarse la campaña electoral, que se prolongará hasta el primer domingo de febrero de 1998, fecha en la que se elegirá un nuevo presidente de la República, la situación de Costa Rica provoca algunas interrogantes, tanto desde el punto de vista económico como político.

En el plano económico, la situación es de virtual estancamiento. Las estimaciones para 1996 señalan prácticamente cero crecimiento: 0,5% con respecto al año anterior, que también había sido insuficiente. Mientras tanto, el déficit fiscal consolidado creció de nuevo, para situarse en alrededor del 4% del PIB, sobre el telón de fondo de una elevada deuda interna estimada en el 23% del PIB. Si a eso se suma el saldo de la deuda externa del gobierno central, así como la deuda interna y externa del Banco Central y la que tiene el propio gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social, por cuotas patronales no cubiertas, el porcentaje de endeudamiento se aproxima al 50% del PIB, lo que, según los expertos, demanda operaciones de cirugía mayor para evitar el colapso. Una vez más la privatización se presenta como la panacea para todos los males: la empresa generadora de energía eléctrica, las telecomunicaciones, los eguros –que desde hace más de medio siglo están en manos del Estado–, y lo que queda de la banca estatal.

La deuda interna no solamente representa un factor que impide elevar la inversión pública, que ha sido muy baja en los últimos años, sino un serio obstáculo para el acceso al crédito por parte del sector productivo, porque impide el descenso de los intereses, actualmente en niveles aparentemente muy elevados desde el punto de vista de la rentabilidad del capital.

El déficit comercial, que había venido bajando con relación al PIB desde 1993, ha vuelto a crecer en 1996, dados el incremento de las importaciones y el estancamiento de las exportaciones. Mientras tanto el PIB por habitante decreció 1,7%, la inflación llegó al 14%, los salarios reales se han estancado, y ha

umentado el desempleo abierto, ubicándose en alrededor del 6,5% de la fuerza laboral, lo cual no refleja la realidad de la situación, en la medida en que oculta el desempleo invisible y la informalidad que afecta a un sector considerable de la ciudadanía.

El malestar con el gobierno

Las cosas no van mejor con la política. La mayor parte de la ciudadanía se siente sin opciones y los sondeos de opinión muestran un alarmante clima de pesimismo. Aunque el gobierno del presidente Figueres ha hecho esfuerzos por mejorar su imagen, el balance que hace la mayoría de los costarricenses es negativo. En primer lugar, las expectativas despertadas durante la campaña electoral de 1993-1994 no se cumplieron. Se prometió dar un giro en materia de política económica y social, para apartarse del neoliberalismo que había sido la línea dominante durante el gobierno anterior, pero se terminó siguiendo el mismo camino. El desencanto se tradujo en un descenso espectacular de la popularidad presidencial en los primeros doce meses de gestión, desplazamiento que no ha podido ser revertido en los dos años siguientes. Por ejemplo, una encuesta realizada por la firma Unimer en enero de 1997, arrojó los siguientes resultados: el 53,2% de los ciudadanos califica como mala o muy mala la gestión del presidente; el 31% la considera regular, y solamente el 15,5% cree que ha sido buena o muy buena.

Pero el problema no ha sido solamente el manejo inconsistente de la política económica, sino también la impericia política mostrada por el presidente y la mayoría de sus colaboradores. Poco después de iniciado el gobierno se comenzó a abrir frentes con demasiada ligereza; frentes cuyo cierre solamente pudo lograrse con grandes costos. El estrecho margen con que se ganaron las elecciones de 1994 indicaba un camino de negociaciones con la oposición representada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y con representantes de la sociedad civil, a fin de alcanzar una situación aceptable de gobernabilidad.

Sin embargo, el camino seguido fue otro. No sólo se ignoró a la oposición sino que se pretendió herirla de muerte, usando como arma la defraudación sufrida por el Banco Anglo Costarricense –uno de los cuatro bancos que conformaban el sistema bancario estatal– y algunos hechos menores de corrupción. La intervención decretada en junio de 1994 y el cierre final ocurrido en septiembre de ese año, no sólo no lograron plenamente el objetivo planteado, sino que se convirtieron en una especie de «bumerang» que terminó golpeando al gobierno y al Partido Liberación Nacional (PLN). Aunque se logró arrojar sombras de duda sobre algunos personajes del PUSC en cuanto a su posible participación en los hechos dolosos, hasta ahora ni siquiera ha sido demostrada la responsabilidad de los funcionarios sometidos a juicio. Mientras tanto, el costo financiero del cierre ha sido uno de los factores de crecimiento del monto del déficit fiscal y la deuda interna.

Pocos meses después, ante una situación económica en deterioro, se tuvo que buscar aceleradamente un acuerdo con el PUSC, para aprobar un tercer Programa de Ajuste Estructural con el Banco Mundial, que había sido sumamente criticado por los principales personeros del gobierno cuando estaban en la oposición, y una elevación del impuesto de consumo, que resultó sumamente impopular. En el transcurso de un año el gobierno pasó de una situación de rechazo total a cualquier tipo de negociación y acuerdo con el PUSC y su líder histórico, el ex-presidente Calderón Fournier, a otra de abierto pacto que le permitió la aprobación legislativa de unos pocos proyectos, calificados como de vital importancia dentro de la estrategia gubernamental. Entre ellos una reforma tributaria y la modificación del régimen de pensiones del magisterio nacional, que dio origen a enormes manifestaciones de rechazo, con la consiguiente deslegitimación para el denominado «pacto Figueres-Calderón», y, por supuesto, para el gobierno.

El anuncio de una reorganización del gabinete, hecho poco después de haberse cumplido dos años de gobierno, despertó nuevamente las esperanzas de un cambio en la orientación seguida hasta ese momento. Pero los ministros más cuestionados no fueron desplazados, como se esperaba, y la anunciada reorganización se convirtió en un intercambio de cargos entre los mismos funcionarios, que dejó un sabor generalizado de insatisfacción.

Las perspectivas electorales

Como ha venido sucediendo desde hace más de una década, la designación presidencial en las elecciones del primer domingo de febrero de 1998, recaerá en uno de los candidatos de los dos partidos que dominan la escena política: PLN y PUSC. Dada la escasa popularidad del gobierno del presidente Figueres, sería de esperar un triunfo arrollador de la oposición; pero la situación no es todavía tan clara. Ciertamente, el candidato del PUSC tiene grandes posibilidades de ganar, pero el resultado podría ser muy ajustado si se mantienen las tendencias observadas. Varios factores han contribuido a determinar esta situación.

En primer lugar, la oposición realizada por el PUSC ha estado plagada de ambigüedades a lo largo de estos tres años. El pacto suscrito por Calderón Fournier a nombre de su partido no solamente dejó dudas sobre el alcance de los acuerdos tomados –dudas que no fueron suficientemente aclaradas–, sino que también convirtieron al PUSC, ante la opinión pública, en corresponsable de algunos de los impopulares proyectos aprobados. Desde entonces el PUSC ha tenido problemas para mantener una adecuada distancia frente al gobierno. En otras palabras, no ha dejado suficientemente establecido ante la ciudadanía el fondo de sus diferencias con el gobierno, sobre todo en materia de política económica y social. En la medida en que la posición de la administración Figueres se fue ajustando a la línea seguida por los gobiernos anteriores y el

eslogan del «PAE a la tica» se abandonó, inevitablemente las coincidencias fueron cada vez mayores. En apariencia, entonces, el PUSC está de acuerdo con la orientación seguida, pero no con el estilo de gobierno del presidente Figueres.

En segundo lugar, el PUSC ha manejado mal el espinoso asunto del Banco Anglo, dejando la impresión de que se quiere proteger a algunos de los miembros del partido que pueden haber participado en el manejo irregular de créditos y sobregiros. Los diputados que participaron en la Comisión Legislativa investigadora de los hechos, no arribaron a conclusiones que borrarán toda duda en cuanto a la responsabilidad de allegados del PUSC, ni mostraron una firme disposición para debatir abiertamente los tres informes que arrojó la investigación. Por supuesto que tampoco el PLN tenía un gran interés en discutir el asunto, sobre todo en tiempos electorales. Una denuncia pública hecha por el saliente Defensor de los Habitantes en marzo pasado, Rodrigo Alberto Carazo, obligó a los dos partidos a discutir el asunto en el pleno Legislativo.

Finalmente, aunque no hay duda de que el candidato presidencial de PUSC, Miguel Angel Rodríguez, tiene la solidez intelectual y la experiencia política adecuada para conducir los asuntos del Estado costarricense, su imagen no logra captar el entusiasmo de los electores. Tiene dificultades para acercarse a la gente, lo que le impide capitalizar el desprestigio del gobierno, y representar a un partido que no sólo no muestra fisuras de importancia, sino que también ha hecho interesantes aportes a la política nacional, como el aumento de la participación de las mujeres dentro de las estructuras partidarias y la elección popular de una buena parte de los candidatos a diputados. Rodríguez y su grupo han realizado un gran esfuerzo para construir un partido moderno, con una plataforma amplia, donde la ortodoxia neoliberal se ha desdibujado, con la intención de atraer simpatizantes procedentes de sectores muy diversos. Ciertamente, todavía no han podido resolver el problema de ubicación del líder tradicional, Calderón Fournier, quien no sólo mantiene una gran cuota de poder, sino que también maneja los asuntos políticos en el mejor estilo patrimonial. Por supuesto que no pocas veces ocurren roces y conflictos.

Mientras tanto, en el PLN las perspectivas no son mejores. La persona que encabeza las listas de popularidad, algunas veces casi a la par del candidato del PUSC, es José Miguel Corrales, también un político de mediana edad, con gran experiencia parlamentaria, que tiene una imagen popular muy buena: se le considera un hombre honesto, bien intencionado y de fácil acceso. Pero ha estado enfrentado a las estructuras del partido, que miran su candidatura como una amenaza para sus intereses. Corrales ha establecido algunas acciones legales en contra de los acuerdos tomados por los órganos directivos del partido, como la decisión de la Asamblea Nacional del PLN de postergar hasta la campaña electoral previa al año 2002, la elección popular de los candidatos a diputados.

Este enfrentamiento, lejos de perjudicar la imagen de Corrales ante los simpatizantes liberacionistas, ha aumentado su popularidad, dado el rechazo que despiertan en la actualidad los políticos tradicionales. Por otra parte, Corrales se ha mantenido en una posición crítica frente al gobierno de Figueres, actitud negativamente evaluada por los dirigentes del PLN, pero sumamente valorada por buena parte de la ciudadanía. Esa posición no es nueva. Desde la campaña electoral de 1993-1994, manifestó su desacuerdo con la designación de Figueres y ha sido consistente en su posición. Paradójicamente, la mayor oposición al gobierno procede de una popular figura del mismo PLN. Por esa razón, es de esperar que el gobierno no haga nada para ayudar a su partido a ganar las próximas elecciones, rompiendo con lo que ha sido tradicional en la política costarricense: el aumento del gasto público, y por tanto del déficit fiscal, en el último año de gobierno.

Con un PLN sumamente dividido en clanes, sin ninguna plataforma unificadora ni proyecto histórico, Corrales va a enfrentar serias dificultades para armar una estrategia de campaña congruente, sobre todo porque su planteo en materia de política económica y social no es aún conocido. Sus detractores lo acusan de padecer del síndrome de la esposa de Lot, es decir, de mirar demasiado hacia atrás, sin darse cuenta cabal de los retos que tiene ante sí la sociedad costarricense en la era de la globalización. Lo cierto es que Corrales representa una especie de postura moral, tanto frente a la corrupción política como ante la arrogante tecnocracia que ignora el costo social de sus decisiones, y eso es hoy suficientemente rentable en términos electorales.

Sin embargo, no son pocos los que piensan que un gobierno encabezado por Corrales terminaría complicando el panorama económico y social del país, con una serie de medidas alejadas de las tendencias predominantes en el contexto internacional. Los grupos empresariales han manifestado abiertamente sus dudas al respecto, mientras otros creen que se puede repetir lo ocurrido con el gobierno de Figueres, que después de un periodo de experimentos sin éxito, terminó adaptándose a esas tendencias. El problema es que, dado el desempeño del gobierno actual, posiblemente la situación del país en 1998 demande una política económica y social muy consistente desde el inicio de la nueva administración, sin ningún tipo de escauceos.

El rechazo a los partidos

Las encuestas de opinión muestran un gran descontento de la ciudadanía con los dos grandes partidos políticos del país; descontento que aparentemente estaría señalando la existencia de un espacio para una nueva fuerza política. Según los resultados de la consulta realizada en mayo de 1997 por la empresa Borge y Asociados, el 35% de los entrevistados dijo que no piensa votar en los próximos comicios, y de ese grupo el 62% afirmó que no cambiará de opinión.

Aunque los políticos insisten en que conforme la campaña electoral se aproxime, el porcentaje de indecisos disminuirá y los resultados de las elecciones, en cuanto a participación se refiere, serán similares a los de los últimos diez años. Sin embargo, la situación no es clara en ese aspecto. Lo cierto es que un rechazo de esta magnitud a los dos grandes partidos es un fenómeno nuevo dentro de la política costarricense.

La diferencia entre las promesas de campaña y la acción gubernamental de la administración Figueres, la debacle de Liberación Nacional, las ambigüedades e inconsistencias del PUSC, así como el aumento de la corrupción en las esferas públicas, han terminado por conformar un panorama de incredulidad y desconfianza respecto de los políticos, que difícilmente logrará cambiar en los próximos meses.

Pero, ¿tienen alternativa los electores costarricenses? Los pequeños partidos políticos registrados no están en capacidad de canalizar ese descontento, ni siquiera en el plano de las elecciones de diputados; tendrían que hacer grandes esfuerzos para convencer a los ciudadanos de que sus acciones futuras no estarán solamente dirigidas a obtener prebendas personales o beneficios locales, como ha sido la constante, con excepciones, desde que la izquierda comunista desapareció del escenario legislativo. Una fórmula nueva es difícil de concebir, y el abstencionismo, dado el trasfondo de la cultura política dominante, no parece ser un camino probable. En fin, que un porcentaje importante de los votantes potenciales costarricenses se encuentra sin alternativa, en una especie de orfandad política imposible de solucionar a corto plazo.

Salamanca, mayo de 1997